



Yopal, abril 22 (veintidos) de dos mil veintidós (2022)

REF:	SENTENCIA ANTICIPADA
DELITO:	DESAPARICION FORZADA y otros
PROCESADO:	NELSON ORLANDO BUITRAGO y otros
RADICACION:	850013107001-2019-00015-01
APROBADA POR:	ACTA No. 044 DE 21 DE ABRIL DE 2022
MP. DR.	JAIRO ARMANDO GONZALEZ GOMEZ

VISTOS:

Decide la Sala el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, en contra de la sentencia anticipada de fecha diciembre 6 de 2021, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Yopal (Casanare).

HECHOS:

De lo consignado en la sentencia recurrida se tiene: el 20 de diciembre de 2003, cuando se encontraba conduciendo un taxi-camioneta propiedad de HERMIDES CASTRO, FERNANDO MONTOYABARRAGAN es retenido por las ACC, obligado a ir al municipio de Monterrey, sector Banco del Oso, donde fue asesinado y sepultado, una vez desmembrado.

La desaparición fue denunciada por su padre JORGE ELIECER MONTOYA RUIZ, el 25 de noviembre de 2005. Luego de muchas averiguaciones y lo manifestado por algunos integrantes de las ACC, se logra la vinculación de los aquí procesados, quienes al termino de sus indagatorias, manifiestan su voluntad de acogerse a sentencia anticipada.

ACTUACION PROCESAL RELEVANTE:

Una vez recibidas las correspondientes indagatorias, al término de las cuales algunos de ellos manifiestan su voluntad de acogerse a la figura de la sentencia anticipada, se realiza con cada uno de ellos la correspondiente

diligencia, en la cual HECTOR GERMAN BUITRAGO PARADA, NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA, JOSUE DARIO ORJUELA MARTINEZ y HENRY ALBERTO AGUIRRE DIAZ, aceptan su responsabilidad, los dos primeros como autores mediatos y los segundos como autores materiales, en los delitos de DESAPARICION FORZADA AGRAVADA, TORTURA AGRAVADA y HOMICIDIO, y solicitan se les profiera sentencia anticipada por los mismos, siendo víctima FERNANDO MONTOYA BARRAGAN, hechos ocurridos en el mes de diciembre de 2003.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Condena a NELSON ORLANDO BUITRAGO PARADA, HECTOR GERMAN BUITRAGO PARADA, JOSUE DARIO ORJUELA MARTINEZ y HENRY ALBERTO AGUIRRE DIAZ, a las penas principales de 320 meses de prisión y 1866.67 S.M.L.M.V. de multa, y a la accesoria de 200 meses de Inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Igualmente les impone el pago de 80 S.M.L.M.V. como daños morales, en favor de la familia de la víctima.

Para lo que es objeto del recurso, basta con señalar que en la sentencia recurrida se impone a los hermanos BUITRAGO PARADA, a ORJUELA MARTINEZ y AGUIRRE DIAZ, la pena accesoria de Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de 200 meses.

RECURSO:

Presentado **únicamente por el Ministerio Público**. Su motivo de inconformidad está relacionado con la dosificación punitiva, concretamente respecto de la pena accesoria impuesta, porque en su sentir, para su determinación se aplicó la normatividad relativa a la pena de multa.

Luego de hacer referencia a los montos señalados para cada delito, resalta que, por el juez de primera instancia, en cuanto a la motivación para esta pena, obligatoria según el artículo 59 del CP, **hubo total omisión**. Pero, además, aplicó indebidamente la norma relacionada con esta sanción.

Solicita que, en consideración a sus planteamientos, se imponga a los procesados una sanción de 240 meses de Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, la cual debe ser descontada en la misma proporción tenida en cuenta por el juez de primera instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA:

Para resolver el recurso presentado la Sala tendrá en cuenta conocida línea jurisprudencial que limita su competencia a lo que es objeto del recurso, salvo que por razón del mismo deban definirse asuntos que estén "inescindiblemente" ligados al mismo. Igualmente, que, por tratarse de una forma anormal de terminación del proceso, en la cual el procesado renuncia a la controversia probatoria y a cuestionar su responsabilidad, los aspectos para los cuales existe legitimación para recurrir excluyen estos aspectos. Por esa razón, el inciso tercero del artículo 40 del CPP, Ley 600, señala que el juez debe proferir sentencia "de acuerdo a los hechos y circunstancias aceptadas, siempre que no haya habido violación de garantías fundamentales". Y para efectos de congruencia, en el mismo artículo, inciso sexto, se asimila el acta de aceptación de cargos, a la resolución de acusación. Es decir, que de ninguna manera la sentencia puede desconocer lo recogido en el acta, en cuanto a los hechos, circunstancias y delitos imputados y aceptados.

La sencillez de lo recurrido no impide a la Sala cuestionar la calidad de la providencia impugnada, **con muy escasa o ninguna fundamentación, desconociendo el señor juez las observaciones que en anteriores oportunidades la Sala le ha hecho por la misma razón**, aunado ello al tiempo transcurrido entre la aceptación de cargos y la formulación de la sentencia. **CASI TRES AÑOS.**

El que sea una sentencia anticipada no debe ser óbice para que se incumplan las normas que ordenan su debida motivación y aplicación. **Artículo 59 del CP.** Pero no solo se omitió lo ordenado por esta norma, sino también lo ordenado por los **artículos 31 y 34** de la misma normatividad. Y puesto que se trata de una conducta reiterada, haciendo caso omiso de las

observaciones que al respecto ha realizado la Sala y que SIEMPRE se mencionan en los recursos del Ministerio Público, es obligación de la Sala ordenar la expedición de copias para las correspondientes investigaciones.

Ya en lo que tiene que ver con el recurso, se tiene: para el delito de Desaparición forzada agravada, el artículo 166 del CP señala una pena de entre 15 y 20 años, o lo que es lo mismo, entre 180 y 240 meses; para el delito de Tortura agravada, la pena oscilaría entre 8 y 20 años, o 96 y 240 meses; y para el Homicidio no existe esta pena como principal.

Acorde con lo anterior, en la sentencia recurrida se desconoció de plano lo ordenado por el artículo 51 del CP, que señala como término máximo de la pena de Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, **20 años**. Efectivamente cuando habla de esta pena, en el acápite donde la determina, señala como monto base **300 meses**, o 25 años, excediendo notablemente el monto máximo permitido.

Puesto que no existe norma especial para la determinación de esta pena, se aplican los parámetros previstos en el artículo 31 del CP: la más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, con las limitaciones ya conocidas y para lo cual cada una de las conductas punibles debió ser sancionada. Como en primera instancia se omitió este procedimiento, pero en el caso de la pena de prisión se partió del monto mínimo, será el a tener aquí en cuenta. Así, para el delito de Desaparición la pena sería de 180 meses y para el de Tortura, de 96 meses. En la primera instancia se aumenta la pena de prisión, por el concurso, en 48 meses. Siguiendo la misma tónica, como se pide en el recurso, ello implicaría que esta pena quedaría, como base, en 228 meses de prisión. A este monto debe realizarse el descuento de la tercera parte por sentencia anticipada, equivalente a 76 meses, lo que implica que la pena de inhabilitación quedaría, como principal, en 152 meses.

Es importante recordar que aquí la pena de Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, en los delitos de Desaparición forzada y Tortura, aparece como principal. Consagrada en los correspondientes tipos penales. Ello explica su proceso de dosificación. Pero no puede desconocerse tampoco el contenido del artículo 52 del CP, que ordena: "En todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para

el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte más, ...". Si por el Despacho de primera instancia se hubiera dado aplicación a esta norma, concordada necesariamente con el artículo 51, se hubiera impuesto como pena accesoria la de 240 meses de prisión, tal como se solicita en el recurso, por ser la máxima legalmente prevista. Ese proceso, en el cual aparecen como pena 200 meses de inhabilitación, carece de cualquier sustento jurídico.

En la providencia recurrida pareciera que solo se consideran como penas principales la de prisión y la de multa, desconociendo de plano el contenido, entre otros, del artículo 34 del CP. Acorde con lo consignado en el recurso y lo expuesto inicialmente, solo se modificará el numeral SEGUNDO de la providencia impugnada, por ser el que se cuestiona en el recurso.

Por lo expuesto, la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal (Casanare), administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia impugnada, de fecha diciembre seis (6) de 2021, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Yopal (Casanare), para señalar como monto de la pena accesoria de Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, DOSCIENTOS CUARENTA (240) MESES.

SEGUNDO. Sin lugar a otros pronunciamientos, por no ser objeto del recurso.

TERCERO. En firme esta providencia, devolver el proceso a su lugar de origen dejando las constancias y anotaciones necesarias. Para la notificación personal a los procesados, se comisiona a las Oficinas de Asesoría Jurídica de las cárceles donde actualmente se encuentran reclusos, con un término de ocho (8) días.

CUARTO. Con destino a las autoridades correspondientes, por la Secretaría del Tribunal se expedirán y enviarán las copias mencionadas en la parte motiva.



JAIRO ARMANDO GONZÁLEZ GÓMEZ
Magistrado

GLORIA ESPERANZA MALAVER DE BONILLA
Magistrada (En uso de permiso)



ALVARO VINOS URUEÑA
Magistrado